



José Luis Reyna

La corrupción

Es innegable que la corrupción es el camino más corto a la impunidad. La experiencia mexicana así lo demuestra. Día con día nos enteramos de que algunos funcionarios del más alto nivel, encargados de la seguridad nacional, prestan sus servicios al crimen organizado y relegan a un segundo plano la tarea que les fue asignada: proteger a la sociedad y al país. Las organizaciones criminales se han desarrollado de manera notable. Disponen de cuantiosos recursos, arsenales propios de un ejército profesional y tienen, además, la capacidad para "convencer" a funcionarios enquistados en la cima del aparato de seguridad del Estado para que les proporcionen la información que contribuye a que sus actividades puedan desarrollarse dentro de un marco en el que los riesgos disminuyen significativamente. En pocas palabras, disponen de la información para adelantarse a la "autoridad". Ese intercambio de datos por dinero se llama corrupción en gran escala.

Hace unos días Latinobarómetro (www.latinobarometro.org) publicó su informe correspondiente a 2008. Se trata de un estudio de opinión pública basado en 19 mil encuestas en 18 países de América Latina. Esta muestra reflejaría la opinión de cerca de 400 millones de habitantes de la región. Uno de los capítulos de esta investigación es sobre la corrupción (págs. 45-50). De los datos contenidos en el análisis puede establecerse que hay una relación estrecha entre los niveles de corrupción reales de los países y la percepción que la sociedad tiene sobre esta lacra, que tiende a extenderse de manera gradual en todos los niveles de la estructura política, económica y social. La corrupción

no es un fenómeno nuevo, pero sí es una lacra que se extiende casi sin freno.

Los responsables de este estudio hacen una pregunta básica respecto del tema: ¿Si

el total de funcionarios públicos fueran 100, cuántos son corruptos? En 2007, los encuestados en toda América Latina respondieron que 67.9. En el estudio de este año la cifra subió a 68.6. Aterrador. Pese al esfuerzo de distintos gobiernos latinoamericanos para combatir la corrupción puede concluirse que, hasta ahora, el intento ha fracasado. La percepción de la sociedad latinoamericana es incuestionable: dos de cada tres funcionarios públicos, de alto rango o de modesta jerarquía, son vistos como corruptos. En todos los niveles de gobierno. Lo anterior implica una desconfianza en las instituciones y una escasa credibilidad en los diversos órganos del Estado cuando intentan difundir alguna información. Sirva de ejemplo el avionazo en que perdieron la vida dos altos funcionarios públicos, entre otras personas. Hubo de inmediato una labor mediática intensa y profunda para desterrar, al menos momentáneamente, pues las investigaciones continúan, que el incidente fue producto de un atentado.

La cifra de 68.6 funcionarios corruptos es el promedio que arrojó el estudio en 18 países latinoamericanos. México se encuentra por arriba de esa cifra, pues el dato que le corresponde alcanza 73.0 por ciento: tres de cada cuatro empleados públicos son percibidos como corruptos. Abarca desde el policía de cruceo hasta los funcionarios ubicados en la cúspide de los aparatos de seguridad. A gente preparada. Tan solo en la última semana han sido detenidos o arraigados algunos personajes vinculados con el combate al narcotráfico.

La Operación Limpieza emprendida por el gobierno prueba que la corrupción no se restringe a estratos menores sino que ha llegado a niveles insospechados. La primera batalla será dentro de la estructura del propio Estado, cuyo andamiaje luce poroso e ineficiente



A la pregunta de si el entrevistado ha sabido de algún acto de corrupción en los últimos 12 meses, el promedio en la región es de 15. México, sin embargo, duplica esa cifra, pues la investigación arroja 28 por ciento de personas que han sabido de actos de corrupción. La probabilidad de sobornar a un policía es de 44 en el conjunto de países latinoamericanos. México alcanza 55 puntos, 11 arriba del promedio. La sociedad chilena, en contraste, percibe que su policía casi no es sobornable: tan

sólo 11 de cada 100 creen que es posible inducir a un acto ilícito a un carabineero. De la misma manera es captada la percepción de los latinoamericanos ante la posibilidad de sobornar a un juez. Si el promedio en la región es de 36, en México es de 45 y en Chile de 18.

Un estudio riguroso, como el que se ha utilizado para presentar estos datos, indica con claridad que la sociedad mexicana percibe a sus autoridades como corruptas. Que, en este caso, la percepción empata con la realidad. La llamada Operación Limpieza que ha

emprendido la administración federal (¿por qué hasta ahora?) prueba que la corrupción no se restringe a niveles jerárquicos menores, sino, por el contrario, ha llegado a niveles insospechados. Si en verdad quiere ganarse la guerra contra la delincuencia organizada, la primera batalla que tendrá que librarse será dentro de la estructura del propio Estado, cuyo andamiaje, después de las detenciones y el elevado número de ejecuciones, luce poroso e ineficiente. ■■

jreyna@colmex.mx

